

INE/CG771/2022

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO**

**EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/55/2022**

**VISTA FORMULADA POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN SONORA, POR LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA, INFORMACIÓN QUE LES FUE SOLICITADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/55/2022, QUE SE INICIÓ CON MOTIVO DE LA VISTA FORMULADA POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO EN SONORA, POR SUPUESTAS VULNERACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR EN TIEMPO Y FORMA, INFORMACIÓN QUE FUE REQUERIDA POR DICHA AUTORIDAD, ATRIBUIBLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

<b>G L O S A R I O</b>	
<b><i>Consejo General</i></b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<b><i>Constitución</i></b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<b><i>INE</i></b>	Instituto Nacional Electoral
<b><i>JLE</i></b>	Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora

<b>G L O S A R I O</b>	
<b>LGIPE</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<b>LGPP</b>	Ley General de Partidos Políticos
<b>PRD</b>	Partido de la Revolución Democrática
<b>PVEM</b>	Partido Verde Ecologista de México
<b>Sala Superior</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

## **R E S U L T A N D O**

**1. Vista.**<sup>1</sup> Mediante oficio INE/JLE-SON/1395/2022, recibido en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el tres de junio de dos mil veintidós, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora, remitió el acuerdo de veintisiete de mayo del presente mismo año, dictado en el expediente JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022, por el que dio vista por la presunta omisión de dar contestación a requerimientos de información que les fueron formulados al PRD y al PVEM, conforme a lo siguiente:

**NOVENO. VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO.** *El veintitrés de marzo del año en curso, se recibió oficio INE-UT/02243/2022 firmado por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a través del cual remite el Acta Circunstanciada AC07/INE/SON/JLE/11-03-2022.*

*Del análisis integral al Acta Circunstanciada levantada con motivo de la comparecencia del ciudadano José Manuel Félix Noriega, se advierte que denuncia que el nueve de marzo del año en curso, en punto de las dieciséis horas con siete minutos (16:07), recibió en su teléfono celular un mensaje de texto proveniente del teléfono 5559854149, cuyo texto es el siguiente:*

*“Este 10 de Abril sal y vota para apoyar al Presidente López Obrador, para que siga su mandata hasta el 2024, que sigan los apoyos y la cuarta transformación.”*

*Por lo anterior, solicitó se investigue la conducta realizada y el indebido uso de sus datos personales.*

---

<sup>1</sup> Visible a fojas 1 y sus anexos a 3-40 del expediente

**CONSEJO GENERAL  
EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

En la misma fecha, esta autoridad tuvo por recibida la queja de mérito, la cual quedó registrada con la clave del expediente citado al rubro y reservó la admisión o desechamiento de la misma, en tanto se contara con elementos suficientes para tomar tal determinación.

Al respecto, mediante acuerdo de doce de mayo del año en curso, se requirió, entre otros, a los partidos políticos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, a efecto de que, en el plazo de setenta y dos horas hábiles, proporcionaran diversa información, apercibidos que, en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en referido proveído, se le impondría alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 35, párrafo 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Acuerdo que les fue notificado de la siguiente manera:

<b>Partido Político</b>	<b>Notificación</b>	<b>Vencimiento del plazo</b>
Partido de la Revolución Democrática	Oficio INE/JLE-SON/1258/2022 13/05/2022 a las 10:45 horas	18/05/2022 a las 10:45 horas
Partido Verde Ecologista de México	Oficio INE/JLE-SON/1260/2022 12/05/2022 a las 15:13 horas	17/05/2022 a las 15:13 horas

En virtud de lo anterior, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta a los partidos políticos en mención, para que, en el plazo de veinticuatro horas, proporcionaran la información solicitada, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído en cita, en el plazo que se indicó, en términos del artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se les impondría una medida de apremio consistente en amonestación pública, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del párrafo 1, del citado precepto legal, con independencia de que con fundamento en el párrafo 6, del mismo artículo, se iniciará de oficio un procedimiento administrativo sancionador. Acuerdo que les fue notificado de la siguiente manera:

<b>Partido Político</b>	<b>Notificación</b>	<b>Vencimiento del plazo</b>
Partido de la Revolución Democrática	Oficio INE/JLE-SON/1298/2022 18/05/2022 a las 13:43 horas	19/05/2022 a las 13:43 horas
Partido Verde Ecologista de México	Oficio INE/JLE-SON/1299/2022 18/05/2022 a las 13:55 horas	19/05/2022 a las 13:55 horas

Por lo tanto, el plazo concluyó sin que a la fecha de elaboración del presente acuerdo se haya pronunciado al respecto.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 447, párrafo 1, inciso m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 35, párrafo 6, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, **se ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto**, por la afectación a las normas de orden público derivado del incumplimiento y contumacia de los sujetos obligados

...

**2. Registro, admisión y emplazamiento.**<sup>2</sup> El nueve de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del *INE*, registró el procedimiento sancionador ordinario, bajo el número de expediente **UT/SCG/Q/CG/55/2022**, asimismo se admitió a trámite dicho procedimiento y se ordenó emplazar al *PRD* y al *PVEM* como sujetos denunciados, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Esta diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente

Denunciado	Oficio	Notificación – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PRD</i>	INE-UT/05429/2022 <sup>3</sup>	<b>Notificación:</b> 10 de junio de 2022 <b>Plazo:</b> 13 al 17 de junio de 2022	13/0262022 <b>Escrito</b> <sup>4</sup>
<i>PVEM</i>	INE-UT/05430/2022 <sup>5</sup>	<b>Notificación:</b> 10 de junio de 2022 <b>Plazo:</b> 13 al 17 de junio de 2022	17/06/2022 <b>Escrito enviado por correo electrónico</b> <sup>6</sup>

Cabe señalar, que para tal efecto se les corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

**3. Alegatos.**<sup>7</sup> El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a los denunciados, a efecto que, en el plazo de cinco días, en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En este sentido, el proveído de mérito fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Denunciado	Oficio	Notificación – Plazo	Alegatos
<i>PRD</i>	INE-UT/05981/2022 <sup>8</sup>	<b>Notificación:</b> 27 de junio de 2022 <b>Plazo:</b> 28 de junio al 04 de julio de 2022	04/07/2022 <b>Escrito</b> <sup>9</sup>

<sup>2</sup> Visible a páginas 41-46 del expediente

<sup>3</sup> Visible a página 48 del expediente

<sup>4</sup> Visible a páginas 63-66 del expediente

<sup>5</sup> Visible a página 53 del expediente

<sup>6</sup> Visible a páginas 70-76 del expediente

<sup>7</sup> Visible a páginas 77-79 del expediente

<sup>8</sup> Visible a página 87 del expediente

<sup>9</sup> Visible a páginas 96-98 del expediente

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

Denunciado	Oficio	Notificación – Plazo	Alegatos
PVEM	INE-UT/05982/2022 <sup>10</sup>	<b>Notificación:</b> 27 de junio de 2022 <b>Plazo:</b> 28 de junio al 04 de julio de 2022	04/07/2022 <b>Escrito enviado por correo electrónico</b> <sup>11</sup>

**4. Reposición de emplazamiento.**<sup>12</sup> Al advertirse una indebida fundamentación en el acuerdo de emplazamiento de nueve de junio de dos mil veintidós, lo cual podría mermar los derechos procesales de las partes denunciadas en este procedimiento, es que, por acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, la autoridad sustanciadora estimó pertinente dejar sin efectos el emplazamiento antes señalado, y ordenó reponer el mismo; lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los principios de certeza y legalidad, así como de brindar seguridad en la esfera jurídica de los denunciados.

Esta diligencia se desarrolló conforme a lo siguiente

Denunciado	Oficio	Notificación – Plazo	Alegatos
PRD	INE-UT/06985/2022 <sup>13</sup>	<b>Notificación:</b> 12 de agosto de 2022 <b>Plazo:</b> 15 al 19 de agosto de 2022	18/08/2022 <b>Escrito</b> <sup>14</sup>
PVEM	INE-UT/06986/2022 <sup>15</sup>	<b>Notificación:</b> 12 de agosto de 2022 <b>Plazo:</b> 15 al 19 de agosto de 2022	19/08/2022 <b>Escrito</b> <sup>16</sup>

**5. Alegatos.**<sup>17</sup> El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a los denunciados, a efecto que, en el plazo de cinco días, en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En este sentido, el proveído de mérito fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

---

<sup>10</sup> Visible a página 81 del expediente

<sup>11</sup> Visible a páginas 99-110 del expediente

<sup>12</sup> Visible a páginas 111-118 del expediente

<sup>13</sup> Visible a páginas 125-128 del expediente

<sup>14</sup> Visible a páginas 135-139 del expediente

<sup>15</sup> Visible a páginas 120-123 del expediente

<sup>16</sup> Visible a páginas 141-145 y sus anexos a 146-151 del expediente

<sup>17</sup> Visible a páginas 152-154 del expediente

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

Denunciado	Oficio	Notificación – Plazo	Alegatos
PRD	INE-UT/07332/2022 <sup>18</sup>	<b>Notificación:</b> 26 de agosto de 2022 <b>Plazo:</b> 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022	29/08/2022 <b>Escrito</b> <sup>19</sup>
PVEM	INE-UT/07333/2022 <sup>20</sup>	<b>Notificación:</b> 26 de agosto de 2022 <b>Plazo:</b> 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022	02/09/2022 <b>Escrito</b> <sup>21</sup>

**6. Elaboración de proyecto.** En su oportunidad, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución del asunto.

**7. Sesión de la Comisión de Quejas.** En la Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el citado órgano colegiado aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes; y

## C O N S I D E R A N D O

### PRIMERO. COMPETENCIA.

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios, cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), 459, párrafo 1, inciso a) y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, los hechos materia de análisis consisten en la presunta omisión del *PRD* y del *PVEM*, de dar respuesta a los requerimientos de información que le fueron formulados por la *JLE*, durante la investigación realizada en el procedimiento especial sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022, ello, en contravención a lo establecido en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y m), de la *LGIPE*, y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la *LGPP*, por la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por órganos de este Instituto; de ahí que esta

<sup>18</sup> Visible a páginas 162-165 del expediente

<sup>19</sup> Visible a páginas 96-98 del expediente

<sup>20</sup> Visible a páginas 168-169 del expediente

<sup>21</sup> Visible a páginas 174-179 y sus anexos a 180-185 del expediente

autoridad sea competente para conocer del presente procedimiento y, en su caso, determinar lo que en derecho corresponda respecto de la falta atribuida.

En ese mismo sentido, de conformidad con el artículo 442, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicha ley, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de la presunta infracción denunciada en el procedimiento sancionador ordinario, atribuida a la parte denunciada, derivada, esencialmente, de la omisión de atender los requerimientos de información formulados por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora.

## **SEGUNDO. CONSIDERACIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO**

El *PRD*, en su escrito de contestación al emplazamiento, argumentó como causal de improcedencia y sobreseimiento, que los hechos u omisiones denunciados no constituyen violaciones a la presente ley, así como la relativa a cuando no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Lo anterior, por las siguientes razones:

- El hecho de que se haya realizado una llamada telefónica a través de la cual se hacía una invitación a acudir a votar para que siga el Presidente López Obrador en su mandato hasta el 2024, no constituyó riesgos de violación a los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y/o reglamentarias correspondientes a la Revocación de Mandato.
- La Ley General de Revocación de Mandato establece que las personas físicas o morales podrán fijar su posicionamiento en relación con el ejercicio

de Revocación de Mandato, siendo que en el expediente de origen la empresa Baggio y Asociados, S.A. de C.V., admitió la realización del mensaje denunciado.

- Al tenerse conocimiento de la fuente emisora del mensaje no existía razón en que se insistiera en actos de molestia a ese partido político, puesto que dicho denunciado no era el responsable de los hechos investigados.

Al respecto, conviene precisar que el artículo 46, párrafos 2, fracción IV, y 3, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE* establecen lo siguiente:

**Artículo 46.**

***Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario***

***2. La queja o denuncia será improcedente cuando:***

...

***IV. El Instituto carezca de competencia para conocerlos, o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa electoral. En este caso, se dará vista a la autoridad que resulte competente.***

...

***3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:***

...

***III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral; y***

Por su parte, el artículo 466, párrafos 1, inciso d), y 2, inciso c), de la *LGIPE*, prevé lo siguiente:

**Artículo 466.**

***1. La queja o denuncia será improcedente cuando***

...

***d) Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley.***

...

***2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:***

...

***c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que a juicio de la misma, o***



*por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.*

En ese sentido, se advierte que la causal invocada por el *PRD*, contenida en los artículos 46, párrafos , fracción IV, del Reglamento de Quejas y, 466, párrafo 1, inciso d), de la *LGIPE*, deviene en **infundada** porque para que pueda determinarse la procedencia de la queja y el correspondiente inicio del procedimiento administrativo sancionador respectivo, es suficiente la existencia de elementos que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia sucedieron, su vinculación a la materia electoral y que tienen racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la legislación.

Así las cosas, en el asunto que nos ocupa, existen estos elementos para iniciar el procedimiento que nos ocupa, toda vez que, los hechos materia de la vista devienen de una vista formulada por la *JLE* por el probable desacato del *PRD* a proporcionar la información que le fue requerida por dicha autoridad; porque tal solicitud se dio dentro de la investigación del procedimiento especial sancionador *JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022*, y porque tal conducta posiblemente ilegalmente, se encuentra contenida en la *LGIPE*.

De ahí que no le asista la razón al partido político denunciado.

Por otro lado, respecto de la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 46, párrafo 3, fracción III, del Reglamento de Quejas y, 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE*, también resulta **infundada**, en virtud de que dicha hipótesis, se refiere a los casos de desistimiento de la queja; situación que, en el caso, no ocurre.

Por las consideraciones antes expuestas, se considera que no le asiste la razón al *PRD*, en consecuencia, **son improcedentes las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer**; por lo que se procede a resolver el fondo del presente asunto.

## **TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.**

### **1. HECHOS MATERIA DE LA VISTA**

El presente asunto tuvo su origen en el Procedimiento Especial Sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022, que fue iniciado con motivo del escrito de queja signado por José Manuel Félix Noriega, quien denunció, en lo que nos ocupa, la promoción y difusión de la Revocación de Mandato que pretende influir en la opinión de la ciudadanía.

Con el propósito de contar con mayores elementos para la integración del asunto, la *JLE*, en uso de su facultad investigadora, mediante proveídos de doce y dieciocho de mayo, ambos del presente año, realizó sendos requerimientos al *PRD* y al *PVEM*, conforme a lo siguiente

<b>Acuerdo</b>	<b>Partido Político</b>	<b>Oficio</b>	<b>Fecha y hora de notificación</b>	<b>Respuesta</b>
12/05/2022	PRD	INE/JLE-SON/1258/2022	13/05/2022 10:45 horas	Sin respuesta
	PVEM	INE/JLE-SON/1260/2022	17/05/2022 15:13 horas	Sin respuesta
18/05/2022	PRD	INE/JLE-SON/1298/2022	19/05/2022 13:43 horas	Sin respuesta
	PVEM	INE/JLE-SON/1299/2022	19/05/2022 13:55 horas	Sin respuesta

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, en el presente asunto se debe determinar si el *PRD* y al *PVEM*, transgredieron lo dispuesto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y m), de la *LGIPE*, y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la *LGPP*, por la presunta omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue solicitada por la *JLE*, mediante los oficios señalados en el cuadro que antecede, en el contexto de la investigación instrumentada en el procedimiento especial sancionador antes referido.

### **2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS**

El **PRD**, al dar respuesta tanto al emplazamiento como a la vista para formular alegatos, señaló:

- ✓ En ningún momento el **PRD**, ni militantes o simpatizantes realizaron llamados telefónicos u otro para difundir que la ciudadanía acudiera a votar en ejercicio democrático de la Revocación de Mandato.
- ✓ Los partidos políticos estaban impedidos para promover y difundir la Revocación de Mandato.
- ✓ No existía razón para que se insistiera en actos de molestia a su representado, toda vez que ya se conocía el origen de las llamadas, materia de los hechos originalmente denunciados.

El **PVEM**, por conducto de su representante propietario antes el Consejo General de este Instituto, al dar respuesta tanto al emplazamiento como a la vista para formular alegatos, señaló:

- ✓ Que las diligencias fueron llevadas a cabo por la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora y no por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electora, es decir, tales diligencias se suscribieron al ámbito local, cuando lo correcto era ampliarlas al ámbito nacional y ser sustanciado por dicha Unidad Técnica.
- ✓ Los requerimientos fueron formulados a nivel local en Sonora, razón por la cual la representación del **PVEM** a nivel nacional no tenía conocimiento del procedimiento sancionador que se llevaba a cabo.
- ✓ La administración del padrón de afiliados del **PVEM** corresponde al Consejo Político Nacional, por lo que, los requerimientos de debieron realizar directamente a la representación del partido ante el Consejo General y no al Comité Ejecutivo Estatal.
- ✓ La Comisión Nacional de Honor y Justicia del **PVEM** ha iniciado de oficio un procedimiento de queja en contra del Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Sonora y contra quien resulte responsable, por la omisión de

**CONSEJO GENERAL  
EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

atender y realizar las acciones necesarias para dar respuesta a los requerimientos solicitados.

### 3. PRUEBAS

#### Documentales públicas aportadas con la vista

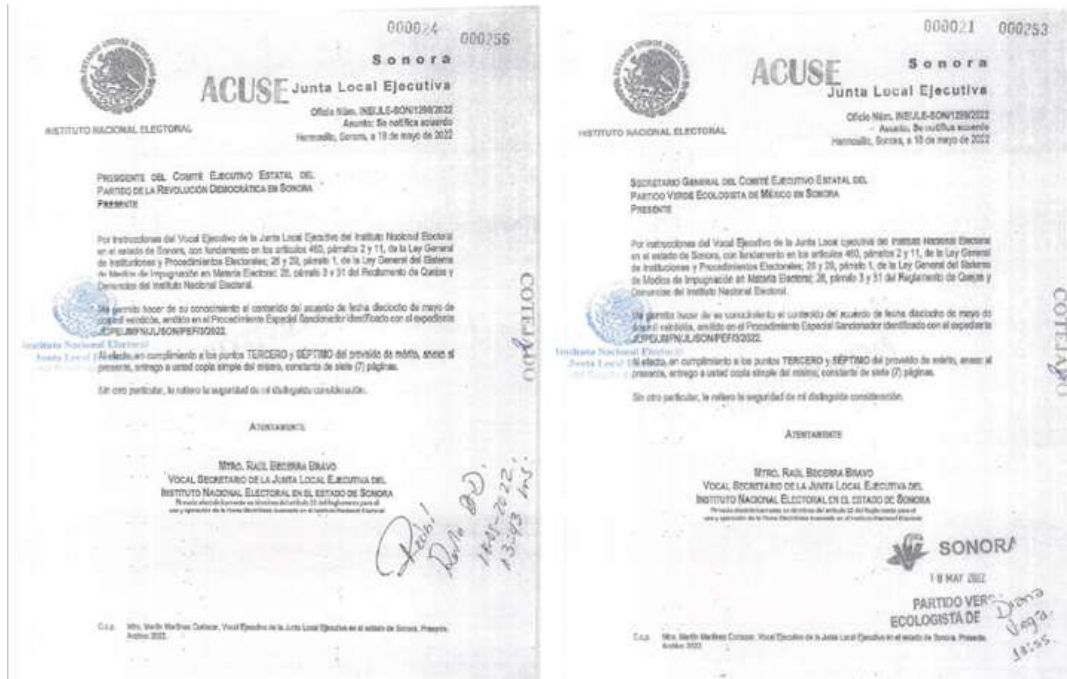
- Copia certificada de los acuerdos emitidos el doce y dieciocho de mayo del presente año en el expediente JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022.<sup>22</sup>
- Copia certificada de los oficios INE/JLE-SON/1258/2022, INE/JLE-SON/1260/2022, INE/JLE-SON/1298/2022 e INE/JLE-SON/1299/2022.<sup>23</sup>



<sup>22</sup> Visible a páginas 15-23 y 28-34 del expediente

<sup>23</sup> Visible a páginas 24, 26, 35-36 y 38-39 del expediente

**CONSEJO GENERAL  
EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**



- Oficio INE/JLE-SON/1536/2022, al que adjuntó copia certificada del escrito firmado por el representante del *PVEM* ante la *JLE*, por el que pretendió dar respuesta a la solicitud de información que se le formuló; cabe precisar que dicho documento tiene fecha de recepción el diez de junio de dos mil veintidós.

Los elementos de prueba referidos, al ser documentos emitidos por autoridades dentro del ámbito de sus facultades, se consideran **pruebas documentales públicas**, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, así como a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen **valor probatorio pleno**, al no encontrarse controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido; los cuales generan certeza en esta autoridad de que la *JLE* requirió información a las partidos políticos denunciados, en el marco de la investigación de un procedimiento especial sancionador, sin que hubieren dado respuesta alguna.

**Pruebas aportadas por el PRD:**

- a) Instrumental de actuaciones.
- b) Presuncional legal y humana

**Pruebas aportadas por el PVEM:**

- a) Documental privada, consistente en copia simple de los siguientes documentos:
  - Auto de radicación y turno de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 17 de junio de 2022.
  - Cédulas de estrados, de fechas 20 y 23 de junio de 2022.
  - Acuerdo de notificación de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 30 de junio de 2022.
- b) Instrumental de actuaciones.
- c) Presuncional legal y humana.

Ahora bien, los anexos presentados por el *PVEM*, conforme a lo establecido en el artículo 462, párrafo 3, de la *LGIPE* y 27, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del *INE*, se trata de documentales privadas, que por sí mismo carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado a partir de su concatenación con los demás elementos allegados al sumario, analizados conforme a las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción respecto a la veracidad de su contenido.

**4. MARCO NORMATIVO**

Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto.

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

***Artículo 41***

***Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos***

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

*que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.*

***El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.*** *El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos Locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los Partidos Políticos Nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.*

Por su parte, el artículo 44, párrafo 1, inciso aa), de la *LGIPE*, establece, entre otras atribuciones del *Consejo General*, la facultad para conocer sobre infracciones a la legislación electoral y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda mediante la instauración de procedimientos de investigación acerca de las conductas irregulares de las que el *INE* llegue a tener conocimiento.

En tales procedimientos de investigación, se encuentran los sustanciados por la *JLE* de este Instituto, conforme a lo establecido los artículos 63, párrafo 1, inciso g), y 459, párrafo 2, y 474, de la *LGIPE*, procedimientos en los que, desde luego, la autoridad electoral habrá de allegarse de los elementos necesarios para determinar la verdad objetiva sobre los hechos puestos a su conocimiento, a efecto de determinar si procede o no fincar una responsabilidad a los sujetos a quienes se les atribuyen infracciones a la normativa electoral.

Así las cosas, abstenerse a colaborar con esta autoridad cuando se les formulen requerimientos de información, es considerado como una infracción, tal y como lo prevé el artículo 443, párrafos 1, incisos a) y m) de la citada Ley General.

**Artículo 443.**

**1.** *Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

*a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;*

*m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y*

...

Asimismo, los partidos políticos como entes de interés público, están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP.

**Artículo 25.**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

*a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;*

Por lo anterior, se concluye que los partidos políticos, podrá ser sujetos de un procedimiento administrativo sancionador, cuando omitan colaborar con el *INE* y no proporcionen la información que les sea solicitada dentro de un procedimiento de esa índole, con el fin de indagar los hechos que lo originaron.

## **5. ANÁLISIS DEL CASO**

Como se ha referido, la *JLE* dio inicio al procedimiento especial sancionador *JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022* por la denuncia de una persona, quien manifestó haber recibido un mensaje de texto, en el contexto de la Revocación de Mandato; motivo por el cual, dicha autoridad, en uso de su facultad investigadora, mediante proveídos de doce y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, realizó sendos requerimientos, entre otros, al **PRD** y al **PVEM**, conforme a lo siguiente:

*a) Indique si el ciudadano Jesús Octavio López Peñuñuri está afiliado o es simpatizante del partido político que representa.*

*b) En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique, desde cuándo está afiliado o es simpatizante, y remita a esta autoridad copia certificada de la documentación que acredite dicho estatus.*

*c) Señale si las personas morales R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V. y Systelvoice S.A. de C.V., se encuentran registradas como proveedores del partido político que representa.*



*d) De ser afirmativa su respuesta al inciso anterior, informe los servicios que, en su caso, estas personas morales ofrecen y, de ser así, remita la información relacionada a dichas contrataciones y, de ser el caso, copia certificada del contrato o acto jurídico celebrado con las morales R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V. y Systelvoice S.A. de C.V.*

Dichos actos de autoridad fueron debidamente notificados a los partidos políticos denunciados a través de los oficios INE/JLE-SON/1258/2022, INE/JLE-SON/1260/2022, INE/JLE-SON/1298/2022 e INE/JLE-SON/1299/2022, en términos de las constancias que acreditan las diligencias respectivas.

En efecto, con base en las constancias que integran el expediente y que dan cuenta fiel de las afirmaciones que se realizan, este órgano colegiado determina que el **PRD** y el **PVEM**, transgredieron las disposiciones legales señaladas por las razones siguientes:

- Mediante acuerdos de doce y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la **JLE** formuló requerimientos de información al **PRD** y al **PVEM**, con motivo de la investigación realizada con los hechos que se investigaban dentro del procedimiento especial sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022.

Para tal efecto, se concedieron a las partes denunciadas, en primer lugar, un plazo de setenta y dos horas y, en el segundo requerimiento, un plazo de veinticuatro horas, estas contadas a partir del momento en que legalmente les fueran notificados cada uno de los oficios.

- Dichas determinaciones fueron notificadas a través de los oficios INE/JLE-SON/1258/2022 e INE/JLE-SON/1260/2022 (acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós) e INE/JLE-SON/1298/2022 e INE/JLE-SON/1299/2022 (proveído acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós).
- En el segundo de los requerimientos formulados, se apercibió a los ahora denunciados que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se les impondría una medida de apremio consistente en una amonestación pública, **con independencia de que se iniciara de oficio por parte de dicha autoridad electoral, un procedimiento administrativo sancionador.**

- Estos requerimientos **revestían de urgencia**, en atención al carácter sumarísimo del procedimiento especial sancionador iniciado por la *JLE* en el contexto de la Revocación de Mandato, así como por la brevedad del trámite y resolución que distingue a ese tipo de procedimientos y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas, de conformidad con los principios que los rigen: legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditéz, mínima intervención y proporcionalidad.
- El plazo para que las partes denunciadas diera contestación al requerimiento de información formulado transcurrió de la forma siguiente:

Persona requerida	Oficio de la UTCE	Fecha y hora de notificación	Plazo	Respuesta
PRD	INE/JLE-SON/1258/2022	13 de mayo de 2022 10:45 horas	72 horas	Sin respuesta
	INE/JLE-SON/1298/2022	18 de mayo de 2022 13:43 horas	24 horas	Sin respuesta
PVEM	INE/JLE-SON/1260/2022	12 de mayo de 2022 15:13 horas	72 horas	Sin respuesta
	INE/JLE-SON/1299/2022	18 de mayo de 2022 13:55 horas	24 horas	Sin respuesta

Así, resulta evidente el incumplimiento a la normativa electoral en que incurrieron **las partes denunciadas**, consistente en la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue solicitada por la *JLE*, atento a los requerimientos que les realizara dicha autoridad, con lo cual infringieron lo establecido en los artículos 443, párrafo 1, incisos m) y n), de la *LGIPE* y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la *LGPP*.

Al respecto, no pasa inadvertido que, el *PRD* al defenderse de las imputaciones que se le reclaman refirió, en síntesis, que dicho ente político ni sus militantes realizaron llamados telefónicos relacionados con el proceso de Revocación de Mandato, además de que ya se conocía el origen de las llamadas, materia de los hechos originalmente denunciados, no existía razón para que se insistiera en actos de

molestia a su representado, toda vez que ya se conocía el origen de las llamadas, materia de los hechos originalmente denunciados.

No obstante, como se preció a lo largo de la presente determinación, los hechos materia de la vista consistieron en la omisión del citado partido político de proporcionar en tiempo y forma, la información que le fue solicitada por un órgano de este Instituto; no así, si dicho ente estuvo involucrado o no en los eventos que dieron inicial al procedimiento especial sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022.

Además, si bien es cierto, el *PRD* alegó que ya se conocía el origen de las llamadas, por lo que los requerimientos que se le realizaron constituían actos de molestia, lo cierto es que ello no le eximía de su responsabilidad de atender las solicitudes que le formuló la JLE, lo que evidenció su actuar ilegal, ya que con su actitud contumaz contravino los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos; más aún que, como se aprecia de las transcripciones de los requerimientos formulados, estos no versaban sobre la supuesta realización de llamadas o envíos de mensajes telefónicos, si no que fueron realizados para conocer si existía relación de una persona física y de una moral con ese partido político.

No obstante, dicho denunciado no dio respuesta a la solicitud de información que le fue realizada, en dos ocasiones, por la *JLE*.

Por otro lado, el *PVEM*, como defensa manifestó que los requerimientos fueron formulados a nivel local en Sonora, razón por la cual la representación del *PVEM* a nivel nacional no tenía conocimiento del procedimiento sancionador que se llevaba a cabo.

Sin embargo, no puede constituir una justificación válida el que se argumente que las solicitudes de información se presentaron en una instancia diversa a la establecida en sus normas internas, ya que, para estos efectos, el partido político debe entenderse como un todo, en el cual, si bien es cierto que existen diversas áreas o instancias para el debido control de su vida interna, también lo es que para garantizar el debido actuar de la autoridad electoral, debió realizar las acciones al

interior de su organización política, a fin de atender de manera pronta, oportuna y eficaz, la solicitud realizada.

Y si bien es cierto, de las constancias que obran en autos, se aprecia una contestación a lo requerido en el procedimiento especial sancionador, lo cierto es que esto fue de manera extemporánea, lo que de suyo, no puede entenderse o concebirse para el caso que nos ocupa, como un eximente o atenuante de responsabilidad, ya que la omisión en una vertiente de contestación extemporánea, trajo como consecuencia que se invalidara o nulificara la facultad de investigación de esta autoridad, en un procedimiento de naturaleza especial, cuya integración ágil y abreviada por mandato de ley, tiene como propósito poder resolver oportunamente las faltas en materia electoral que se denuncian, cometidas durante el desarrollo de los procesos electorales.

Por esta razón, la negativa de los partidos políticos de responder, en el marco de una investigación de un procedimiento especial sancionador, cuyo carácter es sumarisimo, en atención al trámite y resolución que los distingue y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas, dañó el bien jurídico tutelado, a saber, la certeza y oportunidad en la obtención de información con el objeto de contar con elementos objetivos que permitieran a esta autoridad resolver oportunamente.

En consecuencia, **se acredita** la vulneración a lo previsto en el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y m), de la *LGIPE*, y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la *LGPP*, atribuida al **PRD** y al **PVEM**, con motivo de la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue requerida por la *JLE*, lo anterior, con el propósito de que dicha autoridad contara con los elementos necesarios para la integración del Procedimiento Especial Sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022, por tanto, deberá imponerse a las partes denunciadas una sanción que será determinada en el apartado correspondiente de la presente resolución.

#### CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada la actualización de la infracción administrativa por parte del **PRD** y del **PVEM**, corresponde determinar el tipo de sanción a imponer, para lo cual se atenderá lo dispuesto en los artículos 456, párrafo 1, inciso a), de la **LGIPE**, es decir, las circunstancias que rodean la contravención de la norma y las sanciones aplicables a los partidos políticos.

Al respecto, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción que se debe imponer por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta y en el caso que nos ocupa, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta.

Así, para **calificar** debidamente la falta, se debe valorar:

- Tipo de infracción
- Bien jurídico tutelado
- Singularidad o pluralidad de la falta
- Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción
- Comisión dolosa o culposa de la falta
- Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas
- Condiciones externas
- Medios de ejecución

## 1. Calificación de la falta

### A) Tipo de infracción

TIPO DE INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA	DISPOSICIONES JURÍDICAS INFRINGIDAS
<b>Omisión</b> de proporcionar en tiempo y forma, la información que es solicitada por los órganos de este Instituto	La omisión del <b>PRD</b> y <b>PVEM</b> de proporcionar la información que les fue requerida por la <b>JLE</b> , mediante los oficios previamente descritos, en el marco de una investigación implementada en un procedimiento especial sancionador.	Artículos 3, párrafo 1, incisos a) y m), de la <b>LGIPE</b> , y 25, párrafo 1, incisos a) e y), de la <b>LGPP</b> .

### B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Para el caso que nos ocupa, se advierte que la parte denunciada transgredió lo establecido en artículo 443, numeral 1, inciso m), de la **LGIPE**, que prevé que, constituye una infracción administrativa por parte de los partidos políticos, la omisión de proporcionar en tiempo y forma la información que les sea solicitada por órganos de este Instituto, **en ese sentido, el bien jurídico que se tutela es la certeza y oportunidad en la obtención de información con el objeto de contar con elementos objetivos que permitan a la autoridad electoral un debido desempeño de sus funciones.**

Por lo anterior, se puede colegir que la norma referida faculta y, a su vez, posibilita a la autoridad para que cuente con la información necesaria en el ejercicio de sus funciones, de modo que el valor jurídico tutelado se trata de la adecuada integración de los procedimientos sancionadores por parte de la autoridad electoral, mediante investigaciones exhaustivas que le permitan fincar responsabilidades fundadas en elementos sólidos y que generen plena convicción sobre las conductas sancionadas.

Respecto a la naturaleza de los partidos políticos como sujetos obligados, se debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como garante de los bienes jurídicos protegidos antes señalados, de ahí que su obligatoriedad en

el cumplimiento de las leyes en la materia y la tutela del valor jurídico sea insoslayable.

### **C) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

Al respecto, cabe señalar que en el caso a estudio existe **singularidad** de la falta, dado que, la conducta infractora del **PRD** y **PVEM**, se concreta en la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue requerida por la **JLE**; conducta que se circunscribe a un solo acto, es decir, al incumplimiento de dar respuesta a un requerimiento realizado por este Instituto.

### **D) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción**

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- **Modo.** La irregularidad atribuible al **PRD** y **PVEM**, consiste en inobservar lo establecido en el artículo 443, párrafo 1, inciso m), de la **LGIPE**, al omitir proporcionar en tiempo y forma al requerimiento de información que les fue formulado mediante oficios INE/JLE-SON/1258/2022 e INE/JLE-SON/1260/2022 (acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós) e INE/JLE-SON/1298/2022 e INE/JLE-SON/1299/2022 (proveído acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós); no obstante haber sido debidamente notificados de los mismos, conforme a las disposiciones reglamentarias de la materia, y tener pleno conocimiento de la obligación que debían cumplir, así como el plazo establecido para tal efecto.
- **Tiempo.** La infracción se cometió en mayo de dos mil veintidós, temporalidad en que concluyó el plazo para atender los requerimientos de información contenidos en los citados oficios.
- **Lugar.** La irregularidad atribuible al **PRD** y **PVEM**, se cometió en Sonora, toda vez que la autoridad que formuló los requerimientos precisados, fue la **JLE**.

**E) Intencionalidad (comisión dolosa o culposa)**

Se considera que, en el caso existió **dolo** por parte del **PRD** y **PVEM**, en infringir lo previsto en el artículo 443, párrafo 1, inciso m), de la **LGIPE**, dado que, no obstante haber sido debidamente notificados y tener conocimiento de los oficios mediante los cuales la **JLE** les formuló el requerimiento de información correspondiente, no ejercitaron mecanismos a través de los cuales hubiesen proporcionado en tiempo y forma, la información solicitada.

**F) Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas**

**No existe** reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas, toda vez que con el actuar de los partidos políticos denunciados se conculcó un solo precepto jurídico, en el caso, el artículo 443, párrafo 1, inciso m), de la **LGIPE**.

**G) Condiciones externas**

La conducta infractora desplegada por el **PRD** y **PVEM**, tuvo lugar durante la sustanciación del procedimiento especial sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022, instrumentado por la **JLE**.

**2. Individualización de la sanción.**

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los elementos siguientes:

**A) Reincidencia**

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la **LGIPE**, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada *Ley*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.



En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, **no puede considerarse actualizada reincidencia.**

Lo anterior es así, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se hubiere acreditado y sancionado una conducta infractora como la que ahora nos ocupa en contra del **PRD** y el **PVEM**.

### **B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra**

Atendiendo a los elementos objetivos precisados y considerando que la conducta desplegada por los partidos políticos denunciados consistió en la negativa de atender requerimientos formulados por una autoridad administrativa electoral, lo que se tradujo en la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les requerida por la **JLE**, a través de los oficios antes descritos, lo cual implicó una infracción de carácter legal y no constitucional, que si bien fue cometida de forma intencional, debe calificarse con una **gravedad leve**, porque calificarla como de gravedad mayor sería excesivo, en tanto que dicha omisión, no impidió que la autoridad llevara a cabo su función instructora aún sin contar con la información que le solicitó al **PRD** y **PVEM**.

### **C) Sanción a imponer**

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la **LGIPE** confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona, realice una falta similar.

En el caso a estudio, la sanción que se pueden imponer al **PRD** y **PVEM**, se encuentra especificada en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la **LGIPE**.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que rodean

la comisión de las faltas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El citado artículo dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo estas: amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México; reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita; y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la *Constitución* y de la *LGIPE*, con la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos<sup>24</sup> protegidos y los efectos de la falta acreditada, se determina que el partido político denunciado debe ser objeto de sanciones que tengan en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadir al infractor de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I de la *LGIPE*, consistente en amonestación pública sería insuficiente, mientras que las indicadas en las fracciones III, IV y V del precepto señalado serían desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa por la infracción ya establecida**, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.

---

<sup>24</sup> Tesis XXVIII/2003 de rubro **SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.**

En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer **una multa** como sanción al **PRD** y **PVEM**, debido a que omitieron proporcionar en tiempo y forma, información que les fue requerida por un órgano de este Instituto, en el caso la **JLE**, ello dentro del marco de la investigación implementada en el procedimiento especial sancionador JL/PE/JMFN/JL/SON/PEF/3/2022.

Ahora bien, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, lo cual resulta eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la tesis relevante **XXVIII/2003**, emitida por la *Sala Superior*, misma que a letra dice:

***SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-***

*En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza*

*de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

Respecto de la multa, debe considerarse que conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, el parámetro de sanciones monetarias que se pueden imponer a los partidos políticos, será desde uno hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

No obstante, en razón de que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero de la *Constitución* –efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación–, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, por tal motivo no podrá emplearse como índice, medida, unidad, base o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones y que, conforme con el criterio sostenido por la *Sala Superior* en la Jurisprudencia **10/2018**, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**, en el que la señalada autoridad jurisdiccional estableció que, *al imponer una multa, se debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción*, esta autoridad considera necesario tasar la multa a partir de dicha unidad económica.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme las constancias del expediente, la conducta que se imputa al **PRD** y **PVEM**, corresponde al año dos mil veintidós, en el que el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de \$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.).

En atención a lo anterior, una vez que la conducta infractora de la norma quedó acreditada, el **PRD** y **PVEM**, automáticamente se hicieron acreedores a la sanción mínima establecida en la legislación.

A partir de ese mínimo, esta autoridad está facultada para imponer, de manera razonada y proporcionalmente con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares de las conductas, el monto o cuantía que considere serán idóneas para reprender e inhibir nuevamente la realización de las mismas conductas por el mismo sujeto infractor o por otros.

Bajo esa óptica, esta autoridad considera adecuado imponer, para cada uno de los partidos políticos infractores, una multa de **500 (quinientas) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a \$48,110.00 (cuarenta y cho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.)**, vigentes en dos mil veintidós (\$96.22).

Finalmente, se considera que las cuantías aplicables en el presente caso constituyen una base idónea, razonable y proporcional a la conducta en que incurrieron dichos entes políticos, si se considera la afectación del bien jurídico tutelado.

Así, esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

#### **D) Beneficio, lucro derivado de la infracción**

Del análisis a las constancias que integran el expediente del procedimiento en que se actúa, se estima que se carece de elementos suficientes para afirmar que el **PRD** y **PVEM**, obtuvieron algún lucro o beneficio económico con la conducta infractora, es decir, a partir de dejar de atender el requerimiento de información que les fue formulado.

#### **E) Condiciones socioeconómicas e impacto en las actividades de la infractora.**

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, se advierte que al **PRD** y al **PVEM** les corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de noviembre las cantidades de \$28,222,794.56 (veintiocho millones doscientos veintidós mil setecientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.) y de

\$19,751,300.62 (diecinueve millones, setecientos cincuenta y un mil trescientos pesos 62/100 M.N.), respectivamente, una vez descontado el correspondiente importe de las sanciones.

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias de los partidos políticos sancionados, dado que representa el 0.18 % y 0.24% de su respectiva ministración mensual (calculado al segundo decimal).

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues los mencionados partidos políticos —tal como quedó explicado con anterioridad— están en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del **SUP-RAP-114/2009**—<sup>25</sup> es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, la cantidad objeto de la multa serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PRD*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

## **QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.**

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, contenido en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

---

<sup>25</sup> Consultable en la liga de internet [http://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf](http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf).

## RESOLUCIÓN

**PRIMERO.** Se **acredita** la infracción a la normativa electoral, consistente en la omisión de los partidos políticos **de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México**, de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue solicitada por la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se **impone** a los partidos políticos **de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México**, una **sanción** consistente en **una multa de 500 (quinientas) Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a \$48,110.00 (cuarenta y cho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.)**, por la omisión de proporcionar en tiempo y forma, la información que les fue solicitada por la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora, conforme a lo precisado en el Considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**TERCERO.** En términos de lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a los partidos políticos **de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México**, será deducida de las ministraciones mensuales del financiamiento público que, por concepto de actividades ordinarias permanentes, reciban dichos institutos políticos, una vez que esta resolución haya quedado firme, en términos de lo argumentado en el último párrafo del Considerando CUARTO.

**CUARTO.** La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/55/2022**

**NOTIFÍQUESE** a los partidos políticos **de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México**, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

**Por oficio**, a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en Sonora y, **por estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**